

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1994/NGO/23
8 de febrero de 1994

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
50° período de sesiones
Tema 12 del programa provisional

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, Y EN PARTICULAR EN LOS
PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Exposición presentada por escrito por Defensores de los Derechos
Humanos, organización no gubernamental reconocida como entidad
consultiva de la Categoría II

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición escrita que se distribuye con arreglo a las disposiciones de la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[1° de febrero de 1994]

1. Nos vemos obligados una vez más a plantear la cuestión del Tíbet. Existen pruebas fidedignas de que el pueblo tibetano, sometido al dominio extranjero desde hace más de 43 años, sigue siendo víctima de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos. Estas presuntas violaciones afectan a los derechos colectivos e individuales y tocan virtualmente todos los aspectos de la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños tibetanos por igual.

2. Acogemos con beneplácito las numerosas deliberaciones mantenidas en el seno de las Naciones Unidas y las medidas adoptadas por la organización acerca de la situación en el Tíbet, en particular la resolución 1723 (XVI) de la Asamblea General, en que ésta reiteró solemnemente su exhortación a que cesaran las prácticas que privaban al pueblo tibetano de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluso de su derecho a la libre determinación, así como sus resoluciones 1353 (XIV) y 2079 (XX). Recordamos la resolución 1991/10 de la Subcomisión en que ésta expresó su preocupación por los persistentes informes de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales que amenazaban a la distinta identidad cultural, religiosa y nacional del pueblo tibetano, y en que pidió al Gobierno de la República Popular de China que respetara plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo tibetano.

GE.94-10747 (S)

3. No obstante, lamentamos profundamente que tanto la Comisión como su Subcomisión se hayan mostrado renuentes a adoptar nuevas medidas para desalentar las violaciones de los derechos humanos a que se hace referencia en la nota del Secretario General sobre el Tíbet (E/CN.4/1992/37) y que se mantienen sin mengua.

4. Aunque nuestra presentación se centra en la detención política, la tortura y el traslado de poblaciones, instamos a la Comisión a que recuerde las demás violaciones de derechos humanos cuya existencia en el Tíbet se ha denunciado en forma generalizada y a que reconozca que todas estas violaciones constituyen la negación del derecho del pueblo tibetano a la libre determinación.

5. También pedimos a la Comisión que tenga en cuenta que la República Popular de China controla el acceso al Tíbet, restringe los contactos entre los tibetanos y los extranjeros, impide el trabajo de las delegaciones extranjeras a las que permite visitar el Tíbet y estima que proporcionar información a los extranjeros es un acto delictivo, ejerciendo así el control exclusivo de las pruebas más contundentes sobre lo que acontece en el Tíbet (Comité Internacional de Abogados para el Tíbet (ICLT), Resolving Claims of Self-Determination: A Proposal for Integrating Principles of International Law with Specific Application to the Tibetan People, junio de 1993, págs. 43 a 45). Por consiguiente, solicitamos con todo respeto que se pida a la República Popular de China que ponga a disposición de los observadores internacionales toda la información pertinente.

Detenciones por motivos políticos y torturas

6. Hemos recibido pruebas dignas de fe de que la detención y el encarcelamiento arbitrarios de tibetanos por delitos políticos va en aumento. Puesto que la República Popular de China oculta sus cárceles y centros de detención, estas pruebas en gran parte no pueden ser plenamente confirmadas. De todas maneras, las numerosas denuncias de testigos presenciales establecen por lo menos prima facie que la República Popular de China sigue deteniendo y encarcelando a tibetanos por delitos políticos tales como la participación en manifestaciones pacíficas, tenencia de la bandera tibetana y vigilancia de las violaciones de los derechos humanos.

7. Según las pruebas con que se cuenta, entre abril y julio de 1993 se detuvo a por los menos 107 tibetanos por motivos políticos en el Tíbet. Mientras que en febrero de 1992 el número de presos políticos conocidos en la Región Autónoma del Tíbet ascendía a 240, para mayo de 1993 había aumentado a 335 a pesar de que numerosos presos encarcelados en 1989 deberían haber recuperado la libertad en 1992 una vez cumplidas sus penas de tres años de cárcel (Red de Información del Tíbet, Tibet Information Network, 31 de julio de 1993, 11 de agosto de 1993 y 13 de mayo de 1993).

8. La mayor parte de estas detenciones de tibetanos fueron motivadas por su participación en manifestaciones pacíficas, su tenencia de la bandera tibetana y su vigilancia de las violaciones de los derechos humanos (véase Tibet Information Network, 1993 Conference Updates). Como esta Comisión ha

observado en reiteradas ocasiones, esas detenciones y reclusiones arbitrarias violan numerosas normas del derecho internacional. Están expresamente prohibidas por el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el párrafo 1 del artículo 9 de la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Puesto que tienen por fin desalentar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica reconocidos en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal y en los artículos 19 y 21 del Pacto, también violan dichos derechos (ICLT, Resolving Claims of Self-Determination, junio de 1993, págs. 120 a 122).

9. Contamos con pruebas fidedignas de que personas detenidas y encarceladas arbitrariamente también padecen torturas, lo cual coincide con las denuncias recibidas con frecuencia en los últimos años (véase Amnistía Internacional, Repression in Tibet 1987-1992, mayo de 1992; Asia Watch y Tibet Information Network, Political Prisoners in Tibet, febrero de 1992). Por ejemplo, la policía local de Markham, en el Tíbet oriental, habría golpeado durante ocho horas con un palo con clavos al maestro Deng Ge, a un monje y a dos funcionarios tibetanos intermedios a quienes posteriormente se les negó tratamiento en el hospital local. Damehoe Pemo abortó espontáneamente a un feto de cuatro o cinco meses después de haberse visto obligada a permanecer de pie por lo menos durante 12 horas y haber recibido golpes con bastones eléctricos (Tibet Information Network, 19 de octubre de 1993 y 4 de agosto de 1993). Dichas prácticas violan el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Instamos a los miembros de la Comisión a que velen por que la República Popular de China ponga en práctica sin demora las sugerencias y las exhortaciones formuladas por el Comité contra la Tortura en abril de 1993.

10. Además de la tortura se impondrían a los presos políticos condiciones de detención rigurosas e insalubres, incluidos los trabajos forzados y el acceso limitado a un tratamiento médico adecuado. Según se afirmó, en mayo de 1993 11 presos políticos de la cárcel de Drapehi, en Lhasa, tenían problemas de salud, en parte debido a que trabajaban ocho horas por día en invernaderos donde la temperatura podía llegar a 55 grados. El hecho de que en el Tíbet los presos deben trabajar está especificado en el octavo de los "Diez mandamientos" del reglamento carcelario dictado por la Oficina de Reforma por el Trabajo de la República Autónoma del Tíbet en octubre de 1988 (Tibet Information Network, 19 de octubre de 1993).

Traslado de poblaciones

11. Los observadores internacionales coinciden en que ha aumentado considerablemente el ritmo de llegada de colonos chinos al Tíbet. Se considera que esta afluencia es una combinación del traslado directo de chinos por el Gobierno, el reasentamiento inducido por las autoridades y la migración espontánea que cuenta con su apoyo indirecto (International Campaign for Tibet, Population Transfer and the Future of Tibet, abril de 1993). En su veredicto sobre el Tíbet de 20 de noviembre de 1992, el Tribunal Permanente de los Pueblos llegó a la conclusión de que "el traslado de personas no tibetanas

de la República Popular de China al territorio del Tíbet tiene por fin socavar la unidad étnica y cultural del Tíbet".

12. Aunque no se cuenta con cifras demográficas exactas, las pruebas disponibles señalan que en las zonas urbanas de la Región Autónoma del Tíbet y en la mayor parte de las Prefecturas Autónomas Tibetanas orientales y septentrionales de las provincias de Sichuan y Qinghai la población china supera ya a la tibetana. Este drástico incremento de los colonos chinos tendría considerables efectos sobre la tierra y la población autóctona de la meseta tibetana. El traslado de poblaciones guarda una estrecha relación con el genocidio y podría afirmarse por lo menos que se trata de un crimen contra la humanidad, que es intrínsecamente discriminatorio y fundamentalmente destructivo para las culturas cuya cohesión está vinculada integralmente con una tierra determinada (resolución 1992/28 de la Subcomisión; Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, A/46/10; Question of human rights of peoples and nations subject to population transfer, UNPO, A/2/1991/2; Falk, Revitalizing International Law, Ames, 1989, pág. 217; Hannum, Autonomy, Sovereignty and Self-Determination; The Accommodation of Conflicting Rights, Filadelfia, 1990, pág. 91; Parker y Neylon, Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights, 12 *Hast. Int'l Comp. L. Rev.* 411, 1989, pág. 430).

13. Estos efectos pueden verse claramente en el Tíbet. Los tibetanos son víctimas de discriminación en prácticamente todos los aspectos de la vida, incluidos la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. La República Popular de China explota sistemáticamente los recursos naturales del Tíbet en su propio beneficio sin que haya participación popular en el proceso de adopción de las decisiones gubernamentales, y los tibetanos no recogen los beneficios económicos de explotación maderera y minera (Ermacora y Benedek, Austrian Delegation of Legal Experts to China/Tibet, July 1992; Conclusions and Recommendations, septiembre de 1992, pág. 17; LAWASIA y TIN, Defying the Dragon: China and Human Rights in Tibet, marzo de 1991, pág. 89; Defensores de los Derechos Humanos, The Situation in Tibet: A Survey of Current Human Rights Violations, including Denial of the Right to Self-Determination, 17 de enero de 1992, pág. 15; International Campaign for Tibet, The Long March: Results of a Fact Finding Mission in Tibet, septiembre de 1991, págs. 25 y 26). La República Popular de China aplica estas políticas sin demostrar interés alguno en las aspiraciones de los tibetanos, que se exponen a ser castigados e incluso a desaparecer si intentan ejercer alguna influencia sobre las decisiones en materia ecológica (ICLT, The Relationship between Environmental Management and Human Rights in Tibet, julio de 1992, págs. 4 y 5).

Medidas recomendadas a la Comisión

14. La cuestión del Tíbet se ha planteado a la Comisión en reiteradas ocasiones. Nos preocupan los informes que dan cuenta de una creciente desmoralización de los tibetanos que viven en el Tíbet ante la falta de voluntad de la comunidad internacional de ocuparse de sus problemas (Tibet Information Network, mayo de 1992). Al no respaldar la campaña no violenta del pueblo tibetano en defensa de sus derechos y libertades fundamentales, la

comunidad internacional comete el error de fortalecer a quienes propugnan la violencia. Es imperativo que la Comisión actúe ya.

15. Pedimos insistentemente a la Comisión que apruebe una resolución en la que se condenen las violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos en el Tíbet y se pida que cesen las políticas que ponen en peligro la identidad cultural, religiosa y nacional propia del pueblo tibetano. También pedimos respetuosamente a la Comisión que nombre a un relator especial para que estudie la situación en el Tíbet e informe con precisión al respecto.
